

En relación a la solicitud de fecha 30 de marzo de 2020 presentado por el Colegio de Dietistas-Nutricionistas de Cantabria, el Colegio de Fisioterapeutas de Cantabria, el Colegio de Logopedas de Cantabria, el Colegio de Ópticos-Optometristas de Cantabria y el Colegio de Podólogos de Cantabria en el que se solicita que se decrete el cierre inmediato, con carácter retroactivo, de los centros sanitarios de titularidad privada de dichas profesiones, debemos remitirnos a la normativa aplicable actualmente durante la vigencia del estado de alarma.

En primer lugar, debe indicarse, que mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se ha declarado el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Este Real Decreto designa en su artículo 4.2 al Ministro de Sanidad como autoridad competente delegada en su área de responsabilidad. Igualmente, recoge en artículo 10.1 entre los locales y establecimientos que pueden continuar abiertos al público los establecimientos farmacéuticos, sanitarios, ópticas y productos ortopédicos.

El Ministro de Sanidad, como autoridad delegada en la materia, la dictado la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Esta Orden establece en su apartado séptimo que *“a efectos de interpretación del artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se entienden por establecimientos médicos aquellos en los que se requiere la prestación, por parte de profesionales sanitarios, de la asistencia necesaria para resolver problemas de salud que puedan tener una evolución desfavorable si se demora su tratamiento.”*

Con posterioridad, el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19, establece en su artículo 1 lo siguiente:

*“1. Durante la vigencia del estado de alarma acordado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y sus posibles prórrogas, se entenderán como servicios esenciales para la consecución de los fines descritos en el mismo, cualquiera que sea la titularidad, pública o privada o el régimen de gestión, los centros, servicios y establecimientos sanitarios, **que determine el Ministerio de Sanidad**, así como los centros sociales de mayores, personas dependientes o personas con discapacidad, en los términos especificados por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.*

*2. De conformidad con dicho carácter esencial, los establecimientos a que se refiere el apartado anterior deberán mantener su actividad, pudiendo únicamente proceder a reducir o suspender la misma parcialmente en los términos en que así lo permitan las autoridades competentes.”*

Asimismo, el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19, establece una relación de actividades esenciales, tanto del sector público como del sector privado, para las que se permite continuar su actividad durante el período comprendido entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive. A cuyo efecto, el anexo del citado real decreto-ley en su punto 9 establece la continuidad de la



actividad de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, al tiempo que habilita en su artículo 5 al Ministro de Sanidad, en su condición de autoridad competente delegada, a modificar o especificar, mediante las órdenes necesarias, las actividades que se ven afectadas por el permiso retribuido recuperable previsto en el citado real decreto-ley.

De acuerdo con lo señalado, corresponde al Ministro de Sanidad, en su condición de autoridad delegada, la determinación de aquellos centros, servicios o establecimientos sanitarios que, por tener la consideración de esenciales, deben continuar su actividad.

De conformidad con lo previsto en ambos textos legales, se ha publicado la Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen como servicios esenciales determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios. Esta Orden determina como servicios esenciales, a los efectos previstos en el artículo 1 del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, los centros, servicios y establecimientos sanitarios previstos en su anexo. Por otra parte, establece en su artículo 3 que *“desde la entrada en vigor de la presente orden, y hasta el día 9 de abril de 2020 inclusive, los centros, servicios y establecimientos sanitarios que no hayan sido declarados servicios esenciales de acuerdo con lo previsto en el artículo 2, deberán paralizar toda actividad que implique algún tipo de desplazamiento”*.

El citado Anexo establece como servicios esenciales una serie de centros, servicios y establecimientos sanitarios previstos en el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, que por lo tanto deben mantener su actividad.

Por tanto, no es posible acordar por el Consejero de Sanidad el cierre de centros, servicios o establecimientos sanitarios, al corresponder esta competencia al Ministro de Sanidad, en su condición de autoridad delegada en la materia, que ha sido desarrollada por la Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen como servicios esenciales determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Sanidad, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, o directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santander.

Santander, a la fecha de la firma electrónica.

EL CONSEJERO DE SANIDAD,

Fdo.: Miguel Javier Rodríguez Gómez

